

Auto No: AI 003
Proceso: Ejecutivo
Demandante: Luis Felipe Viveros Montoya
Demandado: Grupo Jurídico y Otros.
Radicado: 05001 31 03 022 2023 00286 01
Asunto: Confirma auto apelado.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, Primero (01) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Concita la atención de la Sala desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante en contra del auto fechado el día treinta (30) de agosto del dos mil veintitrés (2023), proferido por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del trámite del proceso Ejecutivo incoado por el señor Luis Felipe Viveros Montoya en contra del Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S, Juan David Viveros Montoya, y José Luis Viveros Abisambra, mediante el cual se denegó el mandamiento de pago pretendido por el demandante.

I. ANTECEDENTES

1.Supuestos fácticos vinculados al presente caso. Correspondió al Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el conocimiento de la citada acción ejecutiva, en la que la parte ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago en su favor y en contra de los citados demandados, bajo la existencia de un contrato de transacción que se celebró el día 3 de enero del 2023, en el que se plasmaron los siguientes compromisos:

a) Obligación de hacer: El Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S se obligó a entregar al demandante los expedientes correspondientes a 40 procesos que están debidamente determinados en el escrito de la demanda, siempre y cuando el ejecutante presentara ante cada uno de los poderdantes las gestiones necesarias para lograr el otorgamiento de un mandato nuevo. Condición que fue debidamente ejecutada por el demandante, en el sentido que remitió las

comunicaciones a los demandados del comprobante de notificación a los clientes sobre el cambio de apoderado, entre otra información –*dirección física, números de contacto de los clientes, copia escaneada de mandatos, etc-* dentro del plazo pactado en el contrato de transacción, esto es, el 31 de marzo del 2023, si se tiene en cuenta que el término otorgado era de “*tres meses contados a partir de la firma del contrato de transacción*”. Para lo cual, acompañó los respectivos documentos comprobantes de la trazabilidad de la prestación.

b) Obligación de Pago pactada con relación a honorarios a favor del ejecutante sobre procesos pagados antes de la firma del contrato no reportados y luego de la firma del contrato mal informados sobre los valores recibidos. En el documento objeto de ejecución, se plasmó frente al primer ítem que “*respecto de los procesos ya han culminado con sentencia favorable y pago de la condena, se entregará todos los soportes del respectivo pago de honorarios a favor del ejecutante, incluyendo copia de la sentencia, resolución de pago y comprobante de transferencia bancaria de los honorarios a su favor.* Como también hubo incumplimiento con esa cláusula, en sendos párrafos describió la suma que a su consideración debe ser objeto de reconocimiento como honorarios, así como los procesos que deviene, y en el caso de los que fueron pagados con posterioridad a la suscripción del acuerdo transaccional, referenció cada uno de los procesos en que no estaba conforme su facturación.

c) Obligación de Hacer: Relativa a la Constitución de Garantía Hipotecaria y Otorgamiento de Pagaré. Describió que la sociedad demandada se había comprometido a constituir una hipoteca abierta sobre un inmueble para el cumplimiento de una obligación, donde el valor inicial de la misma sería la suma de \$10.000.000. En igual sentido, expuso que también estaba pendiente el cumplimiento de transferir la línea de celular por parte del grupo jurídico.

d) Obligación de no hacer relativa a la utilización por parte de los ejecutados de la denominación centro jurídico de derechos humanos. Describe la cláusula contentiva de dicha restricción, así como las circunstancias de su incumplimiento.

1.1 Previo a surtir la etapa preliminar de admisión, la Juez en auto del diez (10) de agosto del dos mil veintitrés (2023) inadmitió la demanda, para que el demandante frente a la obligación de hacer: **(i)** pruebe la realización de las gestiones que le fueron delegadas frente a cada poderdante para conseguir el otorgamiento del mandato, así como la constancia de remisión de los respectivos correos a los señores José Luis y Juan David Viveros Montoya y el comprobante de notificación a los clientes sobre el cambio de apoderado y sus datos de contacto. **(ii)** aporte el acta de entrega del listado de procesos en el que se consignó cada uno de los expedientes entregados a la fecha de suscripción de la transacción, el reconocimiento de los honorarios, y los que estaban pendientes de pago **(iii)** como pretende la suscripción de un pagaré y la constitución de una hipoteca sobre el inmueble deberá aportar la minuta para que sea suscrita por el apoderado.

1.2. Dentro del término oportuno la parte demandante relacionó una serie de correos donde acreditaba que había cumplido con su parte en el contrato de transacción, explicando que frente a determinados procesos no se requiere la entrega de otros documentos, como sucede con el de pacto de honorarios, porque ya figuraba como apoderado principal. En relación con el segundo requerimiento de inadmisión, indicó que se había realizado por conducto de los abogados que representaron a cada parte en el contrato de transacción, finalmente frente a la última carga, informó que no podía adjuntar los listados que solicita el juez porque no existen, dado que no se hizo la entrega respectiva.

2. Del auto impugnado. El Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en providencia del treinta (30) de agosto del año pasado, decidió negar el mandamiento de pago, aduciendo frente a cada una de las pretensiones que *“en la ejecución de la obligación de hacer, se advierte que está sometida a múltiples condiciones, entre ellas que los poderdantes acepten el cambio de mandatario judicial, que de entrada constituye una circunstancia que envuelve múltiples posibilidades que pueden suceder o no, lo que en consecuencia acredita la ausencia de exigibilidad. En la ejecución de sumas de dinero, lo cierto es que el documento base de recaudo no contiene expresamente dichos rubros especificados, refiere a la existencia de posibles pagos y de pagos futuros, y por*

consiguiente pretender que se libre orden de pago sin que dichas sumas de dinero estuvieren previamente contempladas allí, desdice uno de los rasgos o principios de este tipo de litigios que tiene que ver con el que la obligación se halle expresamente prevista en el documento ejecutivo. Asimismo, frente a la obligación de suscribir documentos de garantía hipotecaria y pagaré, advierte que no es una obligación que opere autónomamente, sino que deriva del incumplimiento de la cláusula segunda del contrato de transacción, es decir, sino se reclama el incumplimiento de la principal que sería para el caso en concreto el pago de la suma de \$1.500.000.000 a favor del ejecutado. Finalmente, en lo relativo a la obligación de no hacer de la no utilización de la denominación Centro Jurídico de Derechos Humanos, y la obligación de hacer relativa a la suscripción de cesión de línea de celular son obligaciones pactadas en el contrato que a lo sumo activan las acciones contractuales y no la ejecución, porque las obligaciones que se reclaman son condicionales, por lo tanto no serán exigibles.

3. De la alzada. En la oportunidad procesal pertinente el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación, indicando que (i) fue sorprendido por el auto que rechazó la demanda frente a las pretensiones económicas cobradas respecto de los honorarios establecidos, la no utilización de la denominación Centro Jurídico de Derechos Humanos, la Cesión de la Línea Celular, por cuanto, nada se advirtió en el auto inadmisorio. (ii) desconoce el mérito ejecutivo del contrato de transacción al manifestar que su cumplimiento debe extenderse por las acciones respectivas y no las coercitivas (iii) omitió revisar el anexo 04 de la demanda en donde se explica la relación de los expedientes requeridos para la pretensión de reconocimiento de honorarios, (iii) finalmente justificó en sendos párrafos porqué tienen mérito ejecutivo el contrato de transacción respecto de cada una de las pretensiones.

Esbozados así los motivos de disenso de la parte demandante, los cuales dieron lugar a la decisión apelada, procede la Sala, a decidir el recurso impetrado con fundamento en las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero indicar, que el legislador, al codificar nuestro Código General del Proceso, tuvo en cuenta una serie de exigencias dirigidas a que no se generase un desgaste innecesario del aparato judicial, pretendiendo

garantizar el éxito del proceso para que no se produzcan fallos inicuos, esto es, contrarios a la equidad y la justicia, ni que la presentación de la demanda *per se*, no defina la Litis que involucre la controversia.

Es así que, si la demanda cumple con las exigencias establecidas en el estatuto procesal, habrá de ser admitida (o librarse mandamiento de pago si se trata de proceso ejecutivo), de lo contrario, tendrá que rechazarse, sin embargo, el mismo estatuto procesal contempla la figura de la inadmisión, oportunidad procesal en la que el juez indica al demandante las fallas que presenta la demanda, para que, en el término de cinco (5) días, este subsane los defectos de que ella adolezca, defectos que han sido definidos taxativamente por el legislador y que, en todo caso, se encuentran establecidos en el artículo 90 del Código General del Proceso.

2. Caso en concreto. Tomando como punto de apoyo lo referido en el acápite inmediatamente anterior, ciertamente resulta evidente el hecho de que el apoderado judicial del señor Luis Felipe Riveros aportó en debida forma el título a la demanda ejecutiva tendiente a la exigibilidad de las obligaciones inmersas en el contrato de transacción celebrado entre las partes el día 3 de enero del 2023, siendo entonces éste el punto toral sobre el que habrá de reposar el estudio del medio de impugnación planteado, para determinar si el documento adosado a la acción como base de recaudo ejecutivo cumple con las exigencias normativas, especialmente si contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, o si, en contrariedad a ello, tal y como se concluyó por el juez de primer grado, no existen tales características.

2.1 Ahora bien, teniendo en cuenta que el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Medellín denegó el mandamiento de pago solicitado mediante auto del treinta (30) de agosto del (2023), y que el demandante interpuso el recurso de apelación, se tiene que, en lo atinente a la apelación de dicho auto, en primera medida, es procedente, toda vez que el Código General del Proceso en su artículo 321 consagra dentro de los autos apelables aquel que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y los que rechacen de plano las

excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, siendo en esos casos susceptibles de apelación.

2.2. Con relación a los requisitos que establece el Estatuto Procesal en su artículo 422 como indispensables para que se surta el proceso ejecutivo, se tiene la existencia de una obligación clara, expresa, que sea actualmente exigible y que, adicionalmente, provenga del deudor. Para lo cual resulta necesario que las obligaciones allí descritas sean inteligibles en el sentido que no requiera realizar un mínimo de interpretación para consolidar su existencia, o en el efecto que a pesar de su ausencia de claridad existan otros mecanismos que permitan entender su ejecutabilidad como sucede en los casos del título complejo.

Sin embargo, en el caso sub examine, no estamos en presencia de la anterior excepcionalidad, y por el contrario se advierte la existencia de un documento que a pesar que dice tener la categoría de título ejecutivo –contrato de transacción-, en su contenido se desnaturaliza los requisitos previstos en el artículo 422 del C.G.P, por cuanto no se entrevé con claridad la exigibilidad de las obligaciones de hacer, en los términos del artículo 433 del C.G.P, ni tampoco la de pagar las sumas de dinero objeto de recaudo, y mucho menos la de constitución de garantía hipotecaria, según lo previsto en los términos del artículo 435 del C.G.P, de allí que la improcedencia de la orden de apremio resulte acorde a los argumentos que expuso la juez A quo y que hoy acompaña el Tribunal.

Para llegar a la anterior conclusión no resulta necesario esgrimir mayores elucubraciones diferentes a la categorización de claridad y obligación expresa del título ejecutivo, para advertir que en el caso sub examine, aquellos no logran inferirse del documento transaccional, y prueba de ello, son los sendos párrafos que describe el demandante a fin de contextualizar la prestación que envuelve el título, en este caso, justificar por qué debe ordenarse la obligación de hacer y las de pagar las sumas de dinero -dar-, al señalar supuestamente el cumplimiento de sus actuaciones para obtener la satisfacción del reclamo, sin ser claros, el tipo de obligación que aquél debía primero cumplir para legitimarse en la acción ejecutiva, y tampoco el día de su exigibilidad, para lo cual basta revisar el escrito contentivo del contrato de transacción, especialmente el clausulado descrito en

las páginas 14 al 28, en el que se advierte una serie de condiciones para la materialización de cada una de las obligaciones allí descritas, sin que el demandante, dentro del libelo introductorio de la presente acción ejecutiva, hubiese explicado razonadamente cada uno de los móviles de su exigibilidad, pues llanamente se limitó a señalar la documentación que contenía supuestamente la gestión por aquel encomendada¹, que en algunos casos no era necesario su entrega, porque el ejecutante ya era abogado principal y, en consecuencia, no se reconocerían sus honorarios, entre otras que enunció.

Una serie de justificaciones que desnaturalizan no solo la individualización de la obligación objeto de mérito, sino también su determinación, ante el diamantino esfuerzo que debe hacer el juzgador para auscultar los elementos de índole sustancial que componen el título ejecutivo, lo que sin duda contraría los supuestos del artículo 422 del C.G.P, que en decantada línea jurisprudencial ha sido objeto de pronunciamiento, los que, para el caso en concreto, resulta relevante tener presente el alcance de los parámetros relacionados con claridad y expresividad de la obligación objeto de reclamo, para analizar de cara a cada uno de los ítems del escrito contentivo de la demanda y el documento ejecutivo que no se encuentran plenamente estructurados.

*“**La claridad** de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.*

***La expresividad**, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.*

En línea con lo anterior, es pasible vislumbrar que el título ejecutivo – contrato de transacción exhibido por el apoderado de la demandante-, no reúne

¹ Como sucedió por ejemplo en el caso de la pretensión de hacer, relativa a la entrega de 40 procesos al remitir una carpeta contentiva de sus gestiones frente a cada uno de los procesos,

a cabalidad todos los requisitos de que trata el referido artículo 422 del C.G.P, pues, las obligaciones que allí se encuentran inmersas no permiten extraer las circunstancias de su existencia, razón suficiente para acompañar la decisión del auto fechado el día 30 de agosto del 2023, mediante el cual Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín rechazó la demanda ejecutiva.

De esta manera y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,***

IV. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 30 de agosto del 2023 mediante el cual Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín rechazó la demanda ejecutiva formulada por el señor Luis Felipe Viveros Montoya en contra del Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S, Juan David Viveros Montoya, y José Luis Viveros Abisambra, conforme a las razones expuestas de manera precedente

SEGUNDO: Devolver el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE,

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO**

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ee1f425e61607d362e02526e441570a3f231d978be3e59724a4e5af339dd3b61**

Documento generado en 01/02/2024 10:00:59 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>